

no darse cuenta de que "alentar tendencias proclives a una 'revolución antiimperialista' levaba a jugar con fuego" (pág. 244); por ejemplo, la implementación de las famosas 'cátedras nacionales' en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tampoco desde el gobierno tenían una visión correcta de quiénes eran los grupos guerrilleros que comenzaron a actuar en el país; "existía una percepción tan pobre como esquemática de los adversarios" (pág. 247), ya que los imaginaban como subversivos marxistas y barbudos al estilo de la revolución cubana o argelina, sin comprender que la situación era bastante más compleja, que existían, por ejemplo, importantes influencias del catolicismo y del nacionalismo que llevaron a gran cantidad de jóvenes a optar por la violencia para enfrentar al imperialismo norteamericano y a sus mandatarios argentinos.

Se ocupa también del asesinato del general Aramburu, que sirvió para que los Montoneros realizaran su carta de presentación, y posiblemente para evitar una salida pseudodemocrática encabezada por el mismo Aramburu, quien aparentemente estaba dispuesto a derrocar al alicaído Onganía.

Por último, el autor realiza algunos comentarios sobre la forma en que su gobierno enfrentó a la guerrilla, y emplea el término de "guerra limpia", en obvia alusión y contraposición a la "guerra sucia" del general Videla y compañía. Para ello se basa en que la misma se llevó a cabo mediante el imperio de la ley (ley número 19.053 del 28 de mayo de 1971) y el control de la Cámara Federal; y en que, a diferencia de los años del "Proceso", "la gente que no tenía nada que ver tampoco tenía nada que temer" (pág. 263). Afirmaciones que por cierto pueden o no ser compartidas, ya que si bien al comparar la época de Lanusse con la de Videla, seguramente estaremos de acuerdo en reconocer que la segunda alcanzó una magnitud de violación a los derechos humanos que no tienen parangón con la primera, no debemos olvidar que durante el gobierno de Lanusse también ocurrieron episodios donde el derecho a la vida fue dejado de lado, por ejemplo en la muerte de los presos del penal de Trelew el 22 de agosto de 1972. ■

José Luis Vottero

Hugo Quiroga, *El tiempo del "proceso". Conflictos y coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983.*

Ed. Fundación Ross, Santa Fe, 1994, 493 págs.

En 1979 un politólogo rosarino, Hugo Quiroga, emprendió bajo la dirección de Alain Rouquié en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, una tarea tan fascinante como difícil: el estudio de las relaciones entre el régimen militar y los líderes políticos argentinos desde una perspectiva que combinaba enfoques de teoría política e historia. Esta labor, continuada luego en Argentina con la dirección de Juan

Carlos Portantiero, dio sus frutos con la reciente publicación de *El tiempo del proceso*. Libro voluminoso (casi quinientas páginas), pero de fácil lectura por la agilidad de su estilo narrativo, constituye la primera investigación de largo aliento sobre ese periodo y, posiblemente, la piedra basal de los futuros estudios sobre el tema.

El autor ofrece una reconstrucción histórica sustentada en un entramado de hipóte-

sis explicativas tanto del carácter del régimen como del comportamiento de los partidos políticos. Desde su perspectiva, se estuvo en presencia de una *dictadura institucional*, a saber, de una dictadura de las Fuerzas Armadas como cuerpo institucional. Este carácter se reflejó tanto en sus esfuerzos por evitar la personalización del poder (en vivo contraste con el Chile de Pinochet) como en el tipo de distribución del poder. Los militares se dividieron el poder siguiendo dos criterios: uno igualitario (dos ministros por armas en el gabinete) y otro que respetaba la tradicional preeminencia del Ejército sobre las otras dos fuerzas (doce provincias son confiadas al Ejército, cinco a la Armada y cinco a la Fuerza Aérea).

En segundo lugar, Quiroga sostiene que la dictadura institucional de las FF.AA. se pareció más —utilizando la célebre distinción de Carl Schmitt— a una *dictadura soberana* que a una *dictadura comisarial*. En esta última, se suspende la constitución existente valiéndose de un derecho fundamentado en ella. En la dictadura soberana, en cambio, el poder tiene un sesgo constituyente. El Acta y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional tienen prioridad y están por encima de la Constitución Nacional (art. 14 del Estatuto). Esta dictadura institucional y soberana obedeció a una voluntad política fundacional: producir un nuevo orden, transformar el Estado y la sociedad. De acuerdo con esta interpretación, en marzo de 1976 se asistió a un *golpe estratégico*. A diferencia de experiencias anteriores, no se trató sólo de cubrir el “vacío de poder” sino de abrir un nuevo ciclo histórico definido por la participación permanente e institucionalizada de las FF.AA. en los procesos de toma de decisiones. Esta institucionalización del poder político de los militares en el marco de una democracia tildada de representativa, republicana y federal, era concebida

como la llave maestra que cerraba el candado de la crónica inestabilidad política argentina. Así, la base de este nuevo orden político pseudo-democrático era la sustitución de la legitimación contingente del golpismo por una legitimación autoritaria permanente.

¿Era posible legitimar la dominación autoritaria? Para responder a este interrogante, el autor recurre a una hipótesis de largo plazo. Los militares contaban a su favor con la existencia de una cultura política pretoriana que desde hacía muchas décadas aceptaba la politización de las FF.AA. Para importantes sectores sociales, el fracaso de cada gobierno civil tornaba concebible, “lógica”, la alternativa militar. Por eso la peculiaridad del sistema político argentino residió en la inclusión y reconocimiento explícito de los militares como fuerza política estatal. Desde este ángulo de análisis, el sistema político argentino “combinó” su funcionamiento a los gobiernos civiles con los gobiernos militares. El propio sistema político operó como modo de “legitimación de la dominación militar”.

En 1977 el Ministro de Planeamiento Díaz Bessone, sostenía en un documento de trabajo que la transferencia del poder a los civiles comenzaría en la década del '90. En 1981, el general Harguindeguy aseguraba, en conferencia de prensa, que en 1984 el presidente sería designado por la Junta Militar. ¿Por qué la historia posterior destruyó estos pronósticos?

Pese a la pasividad de la población, el respaldo fervoroso de las asociaciones empresariales más poderosas (Asociación de Bancos Argentinos, ADEBA, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARBEP, etc.), el apoyo explícito de algunos partidos políticos (Fuerza Federalista Popular, Partido Socialista Democrático, y partidos provinciales), la condescendencia de la iglesia católica y el silencio inicial de peronistas y

dicales, el gobierno militar fue impotente para vertebrar un proyecto político viable. Y aquí una de las principales virtudes del libro de Quiroga. Su análisis ayuda a comprender y valorar la importancia que tuvieron los sentidos internos en el seno del gobierno, el progresivo descarte de las soluciones más extremistas como "el proyecto nacional" de DÍ-Bessone, el "Movimiento de Opinión Nacional" de Albano Harguindeguy o el intento infructuoso como tardío de Galtieri para construir un partido oficial a través del nombramiento de dirigentes conservadores en las gobernaciones de importantes provincias.

La incoherencia política del gobierno militar tornaba legítima las sospechas de los partidos. *"Los políticos temen que cuando los mires afirman que no habrá elecciones en 1984, en realidad quiere decir que nunca habrá elecciones en cuanto puedan evitarlo"*. El rápido despertar de la sociedad civil, el fracaso del proyecto económico (la deuda externa pasó de doce mil millones de dólares en 1978 a treinta y cinco mil millones a fines de 1981) y la débil unidad de las FF.AA. condujeron a un punto de inflexión: la invasión a las Islas Malvinas. Su fracaso permitió a la Multitudinaria abrir el espacio de negociación que

necesitaban para avanzar sin condicionamientos corporativos en el camino hacia la democracia.

Siempre me llamó la atención el contraste entre los innumerables trabajos dedicados a la transición democrática en Argentina y los apenas contados con los dedos de una mano, centrados en el periodo militar precedente. Mientras la transición dio lugar a una fiebre de estudios de desigual calidad —la industria de la "transición" no es ni mucho menos ajena a cierta "papermanía" académica— los estudios sobre la dictadura permanecieron en un cono de sombra. A lo sumo, libros testimoniales, catálogos de violaciones a los derechos humanos, juicios moralizadores... La obra de Quiroga marca el inicio de una saludable ruptura con esta tendencia. Su investigación, sólida y rigurosa, abre un nuevo capítulo en los estudios sobre nuestra historia reciente, y como todo trabajo pionero, desbroza el camino e identifica múltiples senderos que, sin duda, serán transitados por los investigadores que, en adelante, se atrevan a volver su mirada al interior descarnado del "tiempo del proceso". ■

César Tcach